

Región Sur

La “guerra de la soja” y el avance del neoliberalismo en el campo paraguayo

Marielle Palau*

y Regina Kretschmer**

* *Socióloga, Investigadora
y miembro del Consejo
de Coordinación
de BASE
Investigaciones Sociales.
Profesora
de la Universidad
Nacional
de Asunción
y de la Univesidad Católica
Nuestra Señora de la
Asunción.*

** *Antropóloga,
Investigadora Social
del Centro de Estudios
en Antropología Social
del Paraguay,
Investigadora adjunta
de BASE
Investigaciones Sociales.*

La lucha contra la soja por parte de organizaciones campesinas y sociales en general debe ser analizada en el marco de las contradicciones propias del modelo de desarrollo agro-exportador que históricamente ha caracterizado al Paraguay, así como también en el marco de la estructura agraria. Estos elementos de carácter estructural, en una coyuntura de aplicación de medidas de corte neoliberal –con un presidente de la República caracterizado por su discurso populista–, colocan la reacción y la lucha campesina contra el modelo sojero, es decir, contra la expoliación de las pequeñas propiedades campesinas y contra los severos daños al medio ambiente, en el ojo de la tormenta.

La creciente conflictividad en el campo a consecuencia de la soja

La problemática de la soja adquiere relevancia dentro de la agenda campesina en el año 2003, cuando el 8 de

enero muere el hijo de una dirigente campesina de la Coordinadora Nacional de Mujeres Campesinas Rurales e Indígenas (CONAMURI) como consecuencia de las fumigaciones aéreas con agrotóxicos (*Round Up*), al tiempo que otros integrantes de la familia, entre ellos siete niños, deben ser hospitalizados en el departamento de Itapúa.

A partir de este hecho, la conflictividad en el campo se ha agravado a consecuencia de la expansión masiva del cultivo de soja, conduciendo a crecientes confrontaciones entre campesinos y sojeros en todo el país. Adquiere su punto culminante en febrero del corriente año en la comunidad de Ypekua del departamento de Caagazú, cuando la policía acribilla a balazos un camión en el que se trasladaban campesinos para apoyar a un grupo que se oponía a la fumigación de cultivos de soja, asesinando a dos de ellos, hiriendo a más de una decena y deteniendo a más de cuarenta personas, quienes además denuncian torturas en las dependencias policiales. Amplios sectores sociales expresan su repudio contra la espiral de violencia, la actuación de la policía y la complicidad de la fiscalía.

A partir de ello, la MCNOC y la Plenaria Popular Permanente¹ convocan para el 16 de marzo a movilizaciones en todo el país, bajo el lema "Por la Vida y la Soberanía Nacional", para expresar su repudio a la utilización de los agrotóxicos y al modelo agro-exportador, así como para protestar contra los tarifazos –destinados a pagar la deuda externa– anunciados por el nuevo gobierno de Duarte Frutos y contra el tratado del ALCA. Estas protestas experimentaron una fuerte criminalización de parte del gobierno y de los medios masivos de comunicación, que inclusive denominaron a las organizaciones campesinas como "guerrilleras". Paralelamente, la Federación Nacional Campesina (FNC) llama también en marzo a una manifestación donde, a pesar de condenarse el hecho y de manifestarse en contra del uso de agrotóxicos, estos reclamos no forman parte de sus reivindicaciones en el marco de la marcha.

Estos hechos, que son solamente los de mayor visibilidad, evidencian la gravedad del problema ante las consecuencias y la profundidad que han alcanzado el modelo neoliberal y la reestructuración agraria, y colocan la problemática de la soja no sólo entre las banderas de las diferentes organizaciones campesinas, sino también, paulatinamente, en el debate público.

La reacción y la lucha campesina

Ante el agravamiento de la situación a partir del incremento de las denuncias de personas intoxicadas, cursos de aguas contaminados, cultivos campesinos rociados indirectamente por las fumigaciones aéreas con agrotóxicos, se puede observar de parte de los

“... las organizaciones campesinas más importantes van direccionando sus críticas al modelo agro-exportador en general y específicamente al sojero, trascendiendo los análisis puramente coyunturales para vincularlo con la necesidad de discutir un nuevo modelo de desarrollo alternativo a los planes y recetas del neoliberalismo”

campesinos y sus organizaciones tres tipos de reacciones: la aceptación pasiva del desalojo, la institucional y la acción directa.

En el primer caso, se trata de familias campesinas desalojadas por el poder del dinero. El ofrecimiento es en muchos casos en dólares, y en efectivo. Los precios suelen oscilar entre 500 y 1.700 dólares por hectárea, y se paga ya sea por tierra titulada, con título provisorio, o incluso por “derecheras”². No hay datos oficiales sobre la magnitud del problema. Una estimación puede ser hecha sobre la base de la expansión del cultivo y las áreas sobre las cuales el mismo se extendió. Según la Cámara Paraguaya de Exportadores de Cereales y Oleaginosas (CAPECO), entre el ciclo agrícola 2002-2003 y el 2003-2004 el área sembrada con soja aumentó en 350 mil has (otra estimación habla de 420 mil has) sobre un total de 1,9 millones. De éstas, puede estimarse que un tercio corresponden a tierras ganaderas reconvertidas a soja, ya sea por sus propietarios o dadas por estos en arriendo a sojeros. Otro tercio serían tierras no campesinas de distinto tipo de propietarios, obtenidas ya sea por compraventa o por arriendo. Pero al menos un tercio correspondería a tierras que anteriormente pertenecían a campesinos y que fueron adquiridas por sojeros. Esta estimación no tiene basamento en datos oficiales de ningún tipo, pero aún conservadoramente puede hablarse de que más de 100 mil has actualmente cultivadas con soja han pertenecido, en el ciclo agrícola previo al 2002-2003, a familias campesinas. Se trataría de unas 10 mil familias que habrían abandonado sus lotes y chacras (unas 70 mil personas), que ya no viven en el campo, que ya no producen comida, y cuya diversidad productiva se ha perdido.

Un segundo grupo de afectados ha reaccionado de una manera que podría definirse como “institucional”, a través de sus organizaciones, y en alianza con otras organizaciones sociales de la iglesia y de los gobiernos descentralizados. La MCNOC, con al menos tres obispos (y buena parte del clero de sus respectivas diócesis), no menos de una doce-

na de intendentes y varios representantes de Concejos Departamentales y Municipales, unidos a organizaciones de docentes, estudiantes, radios comunitarias y otras, formaron lo que dio en llamarse las Coordinadoras Departamentales por la Defensa de la Vida y el Medio Ambiente. Cuatro de ellas se encontrarían funcionando de manera activa. En formación se encuentra también una Coordinadora Nacional de Coordinadoras Departamentales. La adhesión de una parte de la iglesia jerárquica y de un número significativo de representantes de municipios da un respaldo especial a las organizaciones campesinas. En conjunto, se piensa realizar acciones de concientización a la población, denuncias documentadas de casos de violación a la normativa vigente por parte de los sojeros, así como un petitorio al gobierno, que sería presentado próximamente.

Otro tipo de reacción campesina es aquella que puede considerarse como "acción directa". Consiste en detener físicamente las tareas propias exigidas por el cultivo de la soja. Desde la disuasión directa a los propietarios de cultivar en determinadas parcelas y el bloqueo del paso al personal o vehículos que van a fumigar en caminos vecinales, hasta la quema de cultivos terminados y listos para la cosecha. Debe señalarse que nadie ha reconocido la autoría de la quema de los cultivos: tanto podría ser realizada por integrantes de algunas bases de organizaciones campesinas exasperadas por la situación, como resultado de la instigación de políticos que buscan ventajas oportunistas, como por los mismos propietarios para cobrar sus pólizas de seguro ante otras adversidades que deben afrontar³. Podrían haber sido realizadas además por mandato del propio gobierno para justificar acciones represivas contra los campesinos y sus organizaciones, ante la incapacidad del mismo por encontrar una salida democrática al problema.

Durante el año 2003, la problemática era asumida como una lucha "por la vida y el medio ambiente". Es a partir de 2004 cuando las organizaciones campesinas más importantes van direccionando sus críticas al modelo agro-exportador en general y específicamente al sojero, trascendiendo los análisis puramente coyunturales para vincularlo con la necesidad de discutir un nuevo modelo de desarrollo alternativo a los planes y recetas del neoliberalismo.

La MCNOC comprende el problema de la soja en el contexto del modelo económico de la agro-exportación y del neoliberalismo, ya que la soja corresponde a los intereses de unas pocas empresas transnacionales y no al pueblo paraguayo⁴. En este contexto se señala que el gobierno concibe al cultivo de la soja –en su gran mayoría perteneciente a extranjeros– como "inversión", mientras que a los campesinos se los percibe como "invasores".

La FNC se ha manifestado públicamente contra la fumigación masiva, contra "la sojización del país" y el uso indiscriminado de agrotóxicos. Sin embargo, sus banderas cen-

trales, tal como fueron planteadas en la marcha del pasado mes de marzo, continúan girando en torno a la industrialización del algodón y la reforma de la banca pública, en el marco de la necesidad de la implementación de una política que beneficie a las mayorías del país.

La CONAMURI ha adquirido mucho protagonismo en la denuncia y el seguimiento de un delito contra los responsables de la intoxicación de una familia y de la muerte del pequeño Silvino Talavera, de 11 años. Ha comprendido este hecho dentro de su lucha contra el modelo agro-exportador y para la defensa de la vida y la justicia, y no como un caso aislado. Consecuentemente, ha llevado adelante una amplia campaña de concientización de la opinión pública, tanto en el área rural y urbana como a través de debates, mesas redondas, charlas, etcétera. Algunos sectores sociales se han adherido. Gracias a esta campaña, CONAMURI ha aportado decisivamente a informar y sensibilizar a la opinión pública sobre los peligros que conlleva el uso masivo de agro-tóxicos, así como sobre las consecuencias sociales para la sociedad paraguaya. Este hecho adquiere aún mayor importancia por ser el primer caso que no solamente llegó a los tribunales, sino que ganó el juicio, aunque con una pena ínfima, constituyéndose en un antecedente importante.

Ahora bien, sin negar el peso diferenciado que las organizaciones campesinas han dado a esta temática, la misma está presente en cada una de ellas y todas la plantean como la consecuencia del modelo agro-exportador fomentado por las políticas neoliberales que, además de afectar directamente el derecho a la vida, agrava la problemática de la tierra dada la expulsión de los pequeños propietarios.

La concentración de tierra y el modelo agro-exportador

El modelo productivo paraguayo ha estado vinculado históricamente al modelo agro-exportador, el cual a través del tiempo ha ido cambiando paulatinamente de rubros, desde el tanino, la yerba mate y la madera, al algodón y la soja en las últimas décadas. Asimismo, es uno de los pocos países de la región donde nunca se ha realizado una reforma agraria, lo que explica una estructura de tenencia de la tierra de alta concentración. Paraguay es uno de los países que cuenta con la mayor desigualdad en cuanto a la distribución de tierras.

Esta concentración en la tenencia de la tierra y su permanente agudización es uno de los problemas centrales del país. En este sentido se puede mencionar, tomando en cuenta los datos del censo agropecuario de 1991⁵, que “nuestro país tiene alrededor de 300.000 explotaciones agrarias, de las cuales 30.000 (10%) pueden ser calificadas de empresaria-

les modernas de superficie mayor, 48.000 (16%) explotaciones campesinas eficientes, 26.000 (9%) explotaciones campesinas en situación de transición, 160.000 (53%) como periféricas y 36.000 (12%) como minifundios de residencias” (Halley Merlo, 2000).

Este autor señala asimismo que “en relación a la participación de las explotaciones ‘grandes’ o modernas y aquellas que conforman el segmento de la economía campesina tradicional respecto a la superficie total censada en 1991, las primeras representan el 91,3%, en tanto que las explotaciones campesinas en sus diversas formas ocupan a su vez el 8,7%”. Esto estaría significando que el 10% de las explotaciones existentes detentan el 91,3% de la superficie censada en 1991.

Si bien la apertura democrática iniciada en febrero de 1989 generó expectativas de vastos sectores sociales hacia la implementación de una reforma agraria y el respeto al derecho a la tierra, en estos más de quince años no se han dado pasos significativos. Por el contrario, la concentración de la tierra aumentó y se constituye hoy en una de las más altas del continente.

Datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), indican que “en 1991 las fincas mayores a 1.000 has alcanzaban únicamente un 1% del total de las unidades agropecuarias, mientras que habrían estado cubriendo alrededor de un 82% de toda la superficie censada, un claro incremento frente al porcentaje que abarcaban en 1981 (78%)”⁶. La estructura de la tierra en el Paraguay es mantenida por poderosos sectores económicos y políticos que se benefician de la misma y basan su poder en ella. Es así que “de cuatro presidentes (de la República) de la era democrática, tres de ellos detentan enormes fracciones superiores a las 10 mil has; también, ministros de Agricultura provinieron del sector ganadero” (Fogel, 2001). Mientras que por otro lado se estima que serían entre 150 mil y 200 mil las familias campesinas sin tierra.

No se puede dejar de señalar que fue a partir de los años sesenta y sobre todo desde los años setenta, que el régimen dictatorial de Stroessner impulsó la modernización agraria de Paraguay, país caracterizado tradicionalmente por una economía de enclave. En el marco de la Revolución Verde⁷ se fortaleció la agricultura empresarial intensificando la concentración de tierras, tendencia que se acentúa con los megaproyectos de desarrollo, como las represas hidroeléctricas de Itaipú y Yacretá.

El interés del neoliberalismo en Paraguay se basa fundamentalmente en la exportación de ganado y de soja. Todos los proyectos de desarrollo están diseñados para facilitar la exportación de estos productos. Así, el actual presidente Nicanor Duarte Frutos ha enfatizado el interés de reimpulsar obras de infraestructura que mejoren las condiciones para la exportación de estos productos.

“... el cultivo masivo de soja ha agravado la situación del sector campesino poniendo en peligro no solamente su integridad física sino también su permanencia como sector social”

Consiguientemente, la disputa por los recursos naturales, sobre todo la tierra, se está agravando y aumenta la conflictividad en el área rural. La incorporación de amplios territorios al cultivo de soja profundiza aún más la concentración de la tierra en manos de empresas transnacionales, así como el despojo del campesino de su tierra. Los departamentos con mayor cantidad de superficie cultivada son Canindejú, Alto Paraná e Itapúa, todos con las tierras tropicales más fértiles de América Latina.

El documento del Banco Mundial (1998) establece los lineamientos básicos de esta política cuando dice, al referirse al desarrollo rural, que “se necesita una transformación radical de la estrategia rural para colocar a la agricultura en un camino de crecimiento sostenible [...]. La intensificación de la producción y del uso de la tierra conforman el corazón de tal estrategia [...]. Una mayor confianza en el mercado de la tierra es la mejor manera de que la tierra vaya a parar en manos de aquellos que le darán uso más productivo”. Más adelante menciona que se debe “proveer un marco adecuado para el crecimiento agrícola” y “promover la intensificación y la sostenibilidad del uso de la tierra”.

Estas transformaciones conducen a un proceso de reestructuración y desterritorialización que afecta a la sociedad paraguaya en su conjunto. En el corto plazo, acarrea una serie de implicancias directas: las mejores tierras del Paraguay, como la margen derecha del río Alto Paraná, se dedican al monocultivo de soja; los pocos montes que quedan⁸ corren el peligro de desaparecer; comunidades enteras están despoblándose y convirtiéndose en sojales; las escuelas cierran por falta de alumnos; pueblos enteros se intoxican y padecen de enfermedades crónicas; arroyos y pozos de agua se convierten en focos de intoxicación; animales domésticos mueren; y las cosechas de los pequeños agricultores se ven fuertemente afectadas, todo a causa del avance de los sojales y de las masivas fumigaciones de los monocultivos. Éstas son algunas de las consecuencias visibles de la plantación masiva de soja.

"Los campesinos se sienten acorralados por los sojales, hay como una psicosis en el campo a causa de la soja": así expresa una líder campesina la impotencia que siente el campesinado ante el avance de los sojales y la impunidad con que se practican las fumigaciones. Sin dudas, el cultivo masivo de soja ha agravado la situación del sector campesino poniendo en peligro no solamente su integridad física sino también su permanencia como sector social.

La soja ha causado una expulsión masiva de la población rural. Gran cantidad de campesinos no han resistido, sino que han abandonado sus tierras, dejándose seducir por el dinero ofrecido en dólares. Si los campesinos se resisten a la venta de su lote, los empresarios aplican la siguiente política para expulsarlos: en los puntos cardinales de un asentamiento compran lotes, desde donde empiezan a rociar con agrotóxicos los terrenos lindantes. Concientemente y con impunidad se usan las fumigaciones como estrategia para romper la resistencia del campesinado. En muchos casos, aunque los campesinos no quieren vender sus tierras, no ven otra alternativa ante los graves problemas que conllevan las masivas fumigaciones, y venden sus lotes.

Sin duda, uno de los desafíos de las comunidades campesinas consiste en resistir a la inicial venta de lotes. Las comunidades con un bajo nivel organizativo están más expuestas, pero también aquí se puede observar un proceso de organización para crear cohesión interna y buscar mecanismos para impedir el avance de la soja sobre sus tierras; en algunos lugares, es la juventud la que adquiere protagonismo en esta tarea.

En diferentes departamentos se han dado casos aislados donde los pobladores han defendido sus comunidades impidiendo las labores del cultivo de soja y las fumigaciones; así, cierran rutas o se enfrentan a la maquinaria de fumigaciones. En algunos lugares estas acciones tienen un carácter espontáneo de resistencia, mientras que en otros ya adquieren formas más organizadas. Algunos lugares se han declarado como "regiones libres/liberadas de soja".

Construir estrategias unificadas

La ofensiva de la soja ha llevado a una discusión sobre las estrategias a utilizar, ya sea a nivel de las bases como de los dirigentes. Se ha visto que las bases han reaccionado de forma espontánea para defender sus tierras y comunidades. La cuestión consiste ahora en analizar cómo avanzar en la defensa de la propia tierra y cómo enfrentar la ofensiva de los sojales, con el fin de contrarrestar los objetivos del modelo neoliberal.

Esta situación se desarrolla en el marco del gobierno de Nicanor Duarte Frutos, caracterizado por un fuerte discurso populista y por el cumplimiento de las medidas neoliberales dictadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM). Populismo y neoliberalismo entrarán en contradicción a muy corto plazo. Mientras tanto sigue gozando de una relativa popularidad, a pesar de que desde su asunción en agosto de 2003 tuvo como opositores a una parte del movimiento campesino y a sectores populares aglutinados en la Plenaria Popular Permanente.

Frente a este panorama, las organizaciones campesinas se encuentran ante el desafío de actuar en diferentes niveles/frentes. Así, hay plena conciencia de que se deben fortalecer las organizaciones de base e implementar modelos alternativos a fin de contrarrestar el avance del neoliberalismo sobre las tierras campesinas.

Otra estrategia consiste en la recuperación de territorios perdidos (o invadidos) y la implementación de modelos alternativos de comunidades. Durante el mes de abril se ha iniciado una serie de ocupaciones en el Departamento de San Pedro, lo que anuncia un escenario político en el que las ocupaciones de tierra se extenderán a todo el país. En diferentes departamentos se están llevando adelante discusiones sobre la creación de organizaciones de Sin Tierras, ya que se requiere una mayor organización y coordinación entre las ocupaciones.

Por el otro lado, dado que las organizaciones campesinas asumen el modelo agro-exportador y el cultivo de la soja como un problema nacional, vinculado a la política de desarrollo o a la falta de ésta, plantean –y de hecho ya han comenzado– llevar a la población urbana el debate sobre las implicancias del modelo neoliberal para el conjunto de la sociedad paraguaya. La reestructuración agraria impulsada por el FMI y el BM –y seguida al pie de la letra por Nicanor D. Frutos– ahondará las consecuencias para todos los sectores sociales, motivo por el cual la necesidad de fortalecer las organizaciones urbanas se constituye en otro de los desafíos del momento.

El escenario en el campo de las organizaciones campesinas, sin embargo, no está caracterizado por la unidad. El Congreso Democrático del Pueblo⁹ no ha podido volver a conformarse. Hoy las principales fuerzas campesinas actúan en forma independiente, implicando un proceso de retroceso en la unidad frente al protagonismo y la fuerza que tuvieron durante 2002. Las alianzas que se van tejiendo están protagonizadas por la MCNOC, CONAMURI, organizaciones sociales y gobiernos locales, destacándose la incorporación de sectores de la iglesia católica, pero sin la presencia de la Federación Nacional Campesina.

Las diferencias entre las organizaciones campesinas no se dan en las reivindicaciones sino en el peso que se le asigna a cada una de ellas. Mientras la FNC enfatiza en el

modelo de desarrollo, la banca pública y la industrialización del algodón, la MCNOC –sin negar las anteriores– hace hincapié además en la reforma agraria, la política económica del gobierno, la criminalización de las luchas sociales, y contra las medidas neoliberales. A partir de esta realidad, las estrategias deberían apuntar a consolidar la unidad del movimiento campesino.

Las organizaciones campesinas analizan que el conflicto por la tierra se acentuará en el futuro inmediato y tendrá, probable y previsiblemente, un carácter cada vez más violento, lo que requerirá la superación de las actuales limitaciones, centradas fundamentalmente en la dispersión y la falta de recursos y de espacios de unidad entre las principales fuerzas campesinas.

Bibliografía

Banco Mundial 1998 *Paraguay*, Septiembre. <www.bancomundial.org>

Fogel, Ramón 2001 *Las luchas campesinas: Tierra y condiciones de producción* (Asunción: CERI).

Halley Merlo, Hugo 2000 *Revisión comparativa de los proyectos de nueva legislación agraria en relación al proyecto SENTDER*, Programa de Fortalecimiento de las Instituciones Democráticas II.

Notas

1 La MCNOC es la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas, una de las organizaciones más importantes del país. La Plenaria Popular Permanente –formada en el año 2002– es un espacio de unidad de acción de organizaciones populares (campesinas, de trabajadores, barriales y juveniles) y organizaciones políticas de izquierda. En ese mismo año, conjuntamente con el Frente por la Defensa de los Bienes Públicos (del cual es parte la Federación Nacional Campesina), conforman el Congreso Democrático del Pueblo que logra la victoria contra las privatizaciones.

2 O sea, meras ocupaciones de tierra sin que el Instituto de Bienestar Rural (IBR) haya iniciado trámites para su correspondiente legalización y sin mensura oficial.

3 Inminente aplicación de impuestos a la producción y/o exportación de soja; venta anticipada (a futuro) de la producción a precios muy inferiores a los actuales del mercado internacional; paro de camioneros por reclamos sobre fletes; paro de trabajadores en el puerto de Paranaguá; coimas solicitadas por autoridades políticas; gastos de “custodia” de cultivos (a policías o matones), y otros. Estas adversidades habrían provocado ya el suicidio –según testimonios orales de dirigentes campesinos– de al menos 23 sojeros sólo en el Departamento de Alto Paraná.

4 La MCNOC congrega a los sectores de los pequeños agricultores, los sin-tierra, la mujer, los jóvenes. Está organizada en 14 de los 17 departamentos a nivel nacional. En cada departamento existe una Mesa Coordinadora Departamental.

5 No existen fuentes más recientes dado que no se volvió a realizar el Censo Agrícola después de esta fecha.

6 Para esta estimación se supuso que en cada estrato de tamaño inferior a 1.000 has el tamaño promedio en 1991 era similar al de 1981. La superficie del estrato más grande se obtuvo por diferencia. Dado que en 1981-1991 hubo un proceso de subdivisión de minifundios, es probable que los tamaños promedio hayan disminuido en los estratos pequeños, de modo que la presente estimación probablemente subestima el aumento de la concentración y de la desigualdad.

7 Propuesta estratégica de modernización agraria que contempla la introducción de tecnología: mecanización, semillas mejoradas y uso de agrotóxicos en el marco del fomento del monocultivo de renta.

8 Sólo 900 mil hectáreas, cuando existían 9,5 millones hace cincuenta años.

9 En el año 2002 se constituyó en el espacio de unidad de acción más importante de la transición y permitió detener el proceso de privatizaciones.